

El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional: De las ofensivas generacionales al proceso negociador

El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional protagonizó una larga etapa insurreccional en El Salvador. En él se fueron congregando diversos grupos y personas que rechazaban la vigencia de un sistema institucional, por considerarlo heredero del viejo autoritarismo.

No sólo pertenecían al Frente elementos provenientes de expresiones guerrilleras de los años sesenta y setenta, sino también algunos de los que habían sido gobierno con la Junta Militar que en 1979 había derrocado al Presidente y General, Humberto Romero. La Junta Militar pretendía modernizar el Estado y la economía. Pretendían realizar una reforma agraria, siguiendo el modelo de los militares desarrollistas peruanos que a fines de los sesenta había encabezado Velasco Alvarado.

A poco andar se retiraron del gobierno de la Junta Militar varios Ministros aduciendo «la falta de una clara definición antioligárquica y por la orientación exclusiva con que se había utilizado el aparato coactivo del estado en contra de organizaciones populares». Señalaban, decepcionados, que «una vez más los sectores democráticos del país están siendo engañados e instrumentalizados»¹. Entre quienes renunciaron figu-

¹Petrujin Churilov: «Farabundo Martí», Editorial Progreso, Moscú, 1985, pág. 110.

rabán Rubén Zamora y Héctor Dada, los que destacarían más tarde en el polo insurreccional.

No pocas veces el Frente Farabundo Martí desarrolló ofensivas generales que pusieron en jaque la gobernabilidad del incipiente proceso democrático salvadoreño, en particular bajo la presidencia del demócrata cristiano Napoleón Duarte en la década del ochenta.

No fue un actor secundario en la política salvadoreña y el propio gobierno de Duarte le reconoció interlocución cuando en medio de su afán de pacificación entabló un proceso de negociación con la guerrilla, iniciado en La Palma en octubre de 1984.

Se trató de una negociación que apuntaba más a medir fuerza que a establecer una real pacificación. Fue un proceso en el cual el gobierno aparecía debilitado, mientras la guerrilla utilizaba las instancias de diálogo para mostrar la fragilidad del primero. Fue un proceso interrumpido constantemente por acciones militares e incluso por hostigamientos de los insurgentes al propio Presidente Duarte, como quedó en evidencia cuando en 1985 secuestraron a su hija para canjearla por guerrilleros presos.

El proceso negociador de Duarte estaba condenado al fracaso desde el momento en que se planteó. La razón de fondo era que las partes entendían el diálogo de manera diferente.

Para el Coronel Reynaldo López, representante del gobierno, la negociación tenía por objeto el abandono de la lucha armada de parte del Frente Farabundo Martí, a cambio de lo cual «les damos la oportunidad de participar políticamente organizándose como partido legal»².

²La opinión del militar salvadoreño está tomada de una entrevista publicada en la revista «Que Hacer», Lima, abril de 1985 y aparece citada en Benavente, Andrés y Jaraquemada, Jorge: «Procesos Insurreccionales en América Latina: Un Aálisis de casos», Tomo III, Documento de Trabajo del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, 1990, PAG 207.

En tanto, para el representante del Farabundo Martí, Rubén Zamora, que la guerra comenzaba y terminaba en la política y que su objetivo «es la toma del poder y la liberación del país». Por lo tanto, él no veía contradicción alguna entre guerra y solución política, dado que se trataba de «una unidad dialéctica, basada en el principio fundamental de que nuestra guerra es política»³.

Esta confrontación en las maneras de entender y asumir el diálogo quedó aún más claro cuando un personero político de la guerrilla revelaba que el Frente Farabundo Martí estaba dispuesto a concurrir a una mesa de negociaciones con el gobierno «sin renunciar a los objetivos centrales de la revolución», pues «jamás aceptarán las fuerzas revolucionarias un convenio mediante el cual conserve su poder la oligarquía y se mantengan las estructuras sociales y políticas»⁴.

La contextualización histórica de este proceso de diálogo permite entender que no había otra salida que el fracaso de las negociaciones.

El Frente Farabundo Martí tenía por aquel entonces la percepción de que ellos iban ganando fuerzas. Habían dejado de ser guerrilleros en el sentido clásico del foquismo latinoamericano, para convertirse en miembros de un ejército insurreccional. Es decir, capaz de plantearse como beligerante en igualdad de condiciones que el ejército regular, y por lo tanto, con la potencialidad de derrotarlo, tal como había acontecido en Nicaragua con el Frente Sandinista.

Un actor que siente que el poder está a su alcance y que para alcanzarlo sólo debe empeñarse más en ganar la guerra, en debilitar a su enemigo -el gobierno en este caso- no sólo en el terreno militar, sino también en el político, no va a negociar el abandono de sus armas, sino las condiciones de acceso al poder.

³Ibidem.

⁴Salazar, Mario: «Cambios Sociales e Intervención: la Revolución Salvadoreña», en obra colectiva «No intervención, Autodeterminación y Democracia en América Latina», México, Siglo XXI, 1985, pag.125.

Un actor que, por ese entonces, renegó del pluralismo por cuanto lo consideraba un canto de sirena -en palabras de Fabio Castillo, alto dirigente del FMLN- dado que «se trata de un concepto asociado a un sistema que busca la subsistencia de un régimen y de un sistema económico». Por lo tanto, advertía que en el caso de triunfar la insurrección ésta no toleraría el pluralismo, pues no puede admitirse «la conservación de corrientes políticas que tiendan a la destrucción del proceso revolucionario o al restablecimiento de la democracia burguesa»⁵.

Para el gobierno de Duarte, por el contrario, la insurrección se extendía cada vez más. Un cada vez más numeroso contingente de civiles marginales de la ciudad y del campo legitimaban, cuando no apoyaban las acciones del Farabundo. Ante tal amenaza y, dado que el gobierno quería un triunfo más político que militar, recurría a la negociación para materializar un proceso de pacificación.

En noviembre de 1986, el FMLN, luego de un proceso de revisión de su estrategia insurreccional, elaboró un documento en el que daba a conocer sus líneas básicas de acción.

La tesis central del documento era reiterar que el objetivo político «es conquistar un gobierno de amplia participación por la vía del derrocamiento del gobierno actual»⁶.

Si bien se reafirmaba la metodología insurreccional, se oficializó el establecimiento de vínculos con el Frente Democrático Revolucionario, organización política rupturista que comenzó a operar como una suerte de brazo político de la insurrección.

⁵Castillo, Fabio: «Existe la Posibilidad de Recorrer un Camino Propio» en «El Reto Democrático Centroamericano», Ediciones DEI, San José de Costa Rica, 1983, pag.125.

⁶Farabundo Martí de Liberación Nacional: Línea de acción de masas. Fase Preparatoria de la Contraofensiva Estratégica», documento mimeografiado con los acuerdos de la reunión de la Comandancia General, noviembre de 1986, tomado de Revista «Análisis» Ns 1-2, San Salvador, Enero-Febrero de 1988.

Con todo, era un paso significativo hacia una opción política de resolución del problema de fondo, cuestión que se fue acentuando en los años siguientes.

Las directrices de noviembre terminaron sirviendo para afianzar más tarde una voluntad genuinamente negociadora del FMLN al permitir una profundización de sus vinculaciones políticas y sociales. En ese momento, se planteaban éstas en función de la estrategia armada, pero que a la postre fueron internalizando en los guerrilleros el ejercicio más permanente de una práctica política.

Se recomendaba una acción más interrelacionada con el Frente Democrático Revolucionario; desarrollar una política de captación de personalidades de la vida civil y de independientes y una adecuada «combinación de la insurrección con la lucha por la solución política».

Lo que se sostenía entonces, bajo una perspectiva de hegemonía de la vía armada, era que había que crear las condiciones que llevaran al adversario a negociar. Esto refuerza nuestra interpretación de que en los diálogos de Duarte, la guerrilla partía de la premisa de que el gobierno estaba debilitado y ella fortalecida.

«La solución política -decía el FMLN- no se concibe como alternativa a la insurrección ni como cambio de vía de la revolución. Es un compromiso de la estrategia revolucionaria, cuya concreción sólo puede conseguirse en un momento en que la correlación de fuerzas sea verdaderamente favorable para la revolución»⁷.

En la parte declamativa no se advierte ninguna modificación respecto de la concepción instrumentalista del diálogo que se tenía en los años 1984-1985, pero al enfatizarse la posibilidad de una salida política, aun cuando ésta fuera percibida todavía de manera voluntarista, abría lentamente camino a percepciones de mayor realismo político.

⁷Ibidem.

Al fin de cuenta, el FMLN en 1986 podía dar cuenta de varias ofensivas generales que no habían logrado desestabilizar al gobierno, mientras éste al que creían en un proceso de creciente debilitamiento aún seguía en pie.

En 1987 los presidentes de los países centroamericanos firmaron el Tratado de Esquipulas II. Se establecía, en primer lugar, el principio de que los países firmantes deben gobernarse democráticamente y, por lo tanto, se hace necesario fortalecer los gobiernos democráticos del área. En segundo lugar, el documento exigía la deposición de las armas por parte de los movimientos revolucionarios. Para ello, los gobiernos debían hacer algunas concesiones a fin de estimular su incorporación a la vida política. En buenas cuentas, Esquipulas II abrió e institucionalizó un camino de negociación entre los gobiernos y las fuerzas insurgentes.

Inicialmente se pensó que el acuerdo multilateral favorecía a la guerrilla, tanto más si uno de los comandantes del Farabundo Martí, Shafik Handal declaró que Esquipulas II establecía un nuevo contexto que posibilitaba una combinación muy activa entre la lucha armada, la lucha de masas no armada, la lucha política y la lucha diplomática. Así, «mientras se dialoga, la guerrilla no cesa», agregando que «podemos crear nuevas generaciones de combatientes y extender la lucha armada a nuevas regiones en base a este trabajo de combinación de lucha armada con lucha de masas y lucha política»⁸.

En el marco de Esquipulas II el gobierno salvadoreño entró en una nueva ronda de negociaciones, bajo el auspicio de la Iglesia Católica con el Arzobispo Arturo Rivera a la cabeza. Esta vez se acordó formar dos comisiones mixtas, una para establecer las condiciones de alto al fuego y la otra para ver la aplicación en El Salvador de los contenidos del referido acuerdo internacional.

⁸Handal, Schafick: «Esquipulas II», Apuntes de la conferencia dada por el autor citado en el Instituto de Ciencias Sociales de la URSS, el 9 de noviembre de 1987.

Paralelamente al establecimiento del nuevo diálogo, el dirigente del Farabundo, Guillermo Ungo declaraba: «Nuestra presencia no es más que el reconocimiento de que somos una fuerza beligerante sin la cual no es posible decidir los destinos de nuestra patria»⁹.

En una lectura de corto plazo, el impacto de Esquipulas II fue nulo, pues la guerrilla continuó accionando, haciendo fracasar una vez más la propuesta del Presidente Duarte al colocar como condición para convenir un alto al fuego, el que se recompusiera el gobierno salvadoreño «integrando a todos los sectores que están a favor de la solución política, sin exclusiones, incluyendo al FDR y al FMLN»¹⁰.

El gobierno de Duarte hizo una concesión que en la sólo perspectiva del contexto descrito parecía de gran ingenuidad. Dictó una amnistía para personeros políticos rupturistas que no fueron directamente guerrilleros.

Esto permitió el retorno al país de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario que estaban en el exilio, lo que a su vez provocó que el FDR entrara a participar en la vida política salvadoreña. Éste, en verdad, fue el logro más importante y de más vasto alcance: el brazo político de la guerrilla aceptaba, aunque fuera instrumentalmente, las reglas del juego institucional, hecho que ciertamente fortaleció la realización de negociaciones reales en el gobierno de Cristiani.

Con vistas a las elecciones legislativas de marzo de 1988, los partidos integrantes del Frente Democrático Revolucionario, es decir, el Movimiento Nacional Revolucionario (social demócrata) y el Movimiento Popular Social Cristiano pactaron

⁹Ungo, Guillermo: «Seguiremos Trabajando y Construyendo el Diálogo Nacional», en la Revista «Venceremos», órgano clandestino del FMLN, noviembre de 1987.

¹⁰Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional: «Informe sobre la Tercera Reunión del Diálogo», separata de la Revista «Venceremos», 16 de octubre de 1987.

con el legal Partido Social Demócrata para poder participar en los comicios, dando origen al pacto Convergencia Democrática.

La participación del FDR en el quehacer político institucional también puede leerse como el establecimiento de un sutil mecanismo de presión hacia la guerrilla del FMLN, en el sentido de que una parte de los partidarios de la insurgencia comenzarían a valorar positivamente la participación político-electoral. De alguna manera, apuntaba por aquellos años, el ex guerrillero Miguel Castellanos, los integrantes del FDR tenían necesidad de «recobrar su identidad y proyectos políticos originales y no continuar jugando el papel de simple cobertura política a nivel internacional del FMLN»¹¹.

Con la incorporación del FDR al esquema político-institucional se había logrado introducir una cuña en el polo insurreccional, puesto que el Frente Farabundo Martí, tal como lo había hecho en 1982 y 1984, se opuso a las elecciones legislativas de 1988. La razón consistió en que, según el Frente, los comicios estaban insertos en la contrainsurgencia, con lo cual anticiparon que no reconocían legitimidad alguna al proceso electoral. «Jamás daremos tregua para la farsa electoral¹²», decían en el comunicado en que anunciaban el boicot al acto.

Esta divergencia metodológica entre el FMLN y el FDR tendría repercusiones políticas de mediano plazo. El polo insurreccional dejaba de ser homogéneo en relación con la valoración de las vías de acción. La vía política ya no aparecía como algo meramente táctico, sino que era asumida por un importante sector que hasta hacía poco adhería entusiastamente a la salida armada.

¹¹Castellanos, Miguel: «Incorporación del FDR: fortalecimiento del pluralismo ideológico», columna en «Latino Diario», San Salvador, 30 de noviembre de 1987. Sobre Castellanos véase, además, Rojas, Javier: «Conversaciones con el Comandante Miguel Castellanos», Santiago de Chile, editorial Andante, 1986.

¹²Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional: «Comunicado del FMLN en relación a las elecciones de febrero de 1988», reproducido posteriormente en Revista «Análisis», N 3, San Salvador, marzo de 1988.

Este hecho fue poco perceptible políticamente en ese momento, toda vez que las elecciones legislativas las ganó el derechista partido Alianza Renovadora Nacional, ARENA, el más severo crítico al proceso negociador del Presidente Duarte y el más duro oponente del Farabundo Martí. Esto anunciaba para el año siguiente, en que habría elecciones presidenciales, un escenario de polarización que favorecería a la guerrilla pues desencadenaría con mayor vigor otra de sus ofensivas generales.

Lo que por ese entonces no aparecía claro era que en ARENA se impusiera una línea de mayor realismo y que en el FMLN cobrara influencia la línea política del FDR, la que ciertamente se vería estimulada con el colapso de los socialismos reales, simbolizado en la caída del Muro de Berlín en ese mismo año de 1989.

En marzo de 1989 se realizaron elecciones presidenciales, en las que resultó ganador el candidato de ARENA, Alfredo Cristiani¹³. Convergencia Democrática, donde participa el FDR, decidió presentar su propio candidato en la persona de Guillermo Ungo, en una actitud que reiteraba la divergencia del año anterior con el Frente Farabundo Martí.

Tras las elecciones, el FMLN resaltó la alta abstención producida y valoró el papel de Convergencia Democrática como un actor que en el nuevo escenario podría replantear espacios de negociación. Además, a través de la Comandante Ana Guadalupe Martínez dio una señal de diálogo hacia el nuevo gobierno al afirmar en una entrevista de prensa que «es más fácil hablar con alguien que es claramente enemigo que con un gobierno como el de Duarte, que permanentemente estaba cambiando de opinión»¹⁴.

¹³Arena: 53 %; Democracia Cristiana: 36%; Conciliación Nacional: 4,%, Convergencia Democrática: 3,8%; otros (cuatro micro-partidos) 2,5%.

¹⁴Molina y Vedia, Eduardo: «El Salvador, incógnitas y espejismos en el camino de arena», en Revista «Nueva Sociedad» N.101, Caracas, mayo-junio de 1989.

El colapso de los socialismos reales, la crisis terminal de la Unión Soviética, la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua, el aislamiento político y la crisis económica que vivió Cuba tras los cambios mundiales, implicaron una variación sustantiva de los ámbitos favorables al Farabundo Martí. A su vez, el gobierno de Cristiani revelaba ser distinto a aquella imagen de derecha conservadora y autoritaria que se había difundido antes de la elección. Lo uno y lo otro fueron creando las condiciones para establecer un proceso de negociación distinto al anterior. Esta vez los actores involucrados estaban dispuestos a negociar en profundidad.

Con todo, el Frente Farabundo Martí lanzó lo que sería su última ofensiva general, en noviembre de 1989. Esta vez las acciones guerrilleras llegaron hasta el propio San Salvador, buscando con ello agudizar la polarización y aislar al gobierno derechista de Cristiani forzándolo a un severo endurecimiento que alimentaría el espiral de guerra. Fue la última apuesta a la salida insurreccional. La ofensiva fracasó y con ello se clausuraba la opción militarista dentro del FMLN.

Lo que se produjo fue una situación de empate entre las fuerzas involucradas, donde ni la insurrección podía desestabilizar al gobierno (o al sistema), ni éste podía vencer militarmente a la guerrilla. Ésta fue otra de las condiciones importantes - en la medida en que ello es internalizado por las partes- para empujar a un diálogo serio.

Poco después de la ofensiva general se celebró en San Isidro Coronado, Costa Rica, una reunión de Presidentes centroamericanos. Todos, incluido Daniel Ortega de Nicaragua, dieron su respaldo al Presidente Cristiani como demostración de «su invariable política de apoyo a los gobiernos que han surgido de procesos democráticos, pluralistas y participativos». Y acordaron hacer «un vehemente llamado a los insurgentes salvadoreños para que cesen las hostilidades, renuncien a la violencia y acepten un plan de desmovilización»¹⁵.

¹⁵Rouquié, Alain: «Guerras y Paz en América Central», México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pag.294.

El Frente Farabundo Martí comenzaba a darse cuenta que el apoyo y la comprensión internacional que tuvo en otros momentos ya no le acompañaba. Ni la Nicaragua sandinista -en las postrimerías del gobierno de Ortega- aparecía dispuesta a acompañarlo en una coyuntura de declinación del socialismo real.

Esta vez no fue la Iglesia Católica la instancia mediadora sino que Naciones Unidas, aceptada sin mayores problemas por las partes. En abril de 1990, en una reunión en Ginebra se logró firmar un acuerdo sobre el protocolo de la negociación, y en mayo del mismo año se suscribió en Caracas el acuerdo para determinar la agenda de las negociaciones. Esto evidenciaba el avance y la seriedad del proceso.

La agenda de la negociación contenía cuatro puntos. El primero era relativo a la Fuerza Armada, donde se incluían los temas de impunidad, reducción, creación de una nueva policía. El segundo punto era relativo a derechos humanos y al establecimiento de una comisión sobre desaparecidos. El punto tercero era sobre reformas constitucionales, y el cuarto sobre acuerdos socioeconómicos.

Las negociaciones sobre el contenido de la agenda comenzaron en julio en San José de Costa Rica, mostrando altos y bajos, pero con un balance favorable como lo evidenciaron los acuerdos que se fueron adoptando. Aquí se acordó un convenio sobre derechos humanos en el cual se «garantiza a todos los salvadoreños el derecho a la vida, la integridad y a la seguridad».

En la reunión de septiembre, también en San José, se produjo un estancamiento por cuanto las posturas de las partes aparecieron polarizadas. Mientras el gobierno demandaba la desmovilización unilateral, el FMLN reclamaba la disolución del Ejército. Un mes después, en octubre, el Representante del Secretario General de Naciones Unidas entregó a las partes dos memorándums en la reunión de Ciudad de México. En uno planteó la depuración del Ejército y en el otro la sanción a los responsables de los «grandes crímenes».

La negociación se desarrolló sin que la guerrilla dejara de operar y sin que el gobierno deje de actuar militarmente. Es más, en el período inicial del diálogo, grupos de extrema derecha que habían formado los escuadrones de la muerte, asesinaron a varias personalidades vinculadas políticamente con la insurrección en medio de una clara impunidad, aun cuando el gobierno calificaba de irracionales los asesinatos de los escuadrones de la muerte y buscaba resaltar su propia posición. El Farabundo Martí, por su parte, lanzó una extensa y reactiva contraofensiva que en otro contexto hubiera arrojado dudas sobre su real voluntad negociadora. Sin embargo, las conversaciones prosiguieron.

A juicio de un analista especializado en temas centroamericanos, la razón por que esta vez no hubo suspensión del proceso negociador fue de orden político. «Lo más probable es que el cansancio de la opinión pública salvadoreña ante las consecuencias de la guerra y la presión de los aliados externos de ambas partes estén obligando tanto al régimen como a la insurgencia a no romper el diálogo, dado el alto costo político que ello tendría para quien fuese considerado responsable de su interrupción»¹⁶.

En abril de 1991, en otra reunión en Ciudad de México se alcanzó el acuerdo sobre la reforma constitucional y la creación de la Comisión de la Verdad. Las reformas se refirieron a la independencia del Poder Judicial y al establecimiento del Tribunal Supremo Electoral abierto a todas las tendencias políticas.

Poco después se convino la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), cuyos objetivos eran supervisar y controlar los acuerdos políticos a los que arribaran las negociaciones y elaborar los anteproyectos de ley para poner en marcha los acuerdos. La Comisión estaría integrada por dos representantes del gobierno -uno de ellos militar- por dos representantes del FMLN y un representante por cada par-

¹⁶Molina y Vedia, Eduardo: «El Salvador. Dificultades de la Pax Americana», en Revista «Nueva Sociedad», N. 115, Septiembre-October de 1991.

tido político con representación parlamentaria. El Arzobispo de San Salvador y un delegado de la misión de Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) participarían en calidad de observadores.

Todos éstos eran claros indicadores de que el proceso de negociación era irreversible.

Los Presidentes de los países centroamericanos, por su parte, volvieron a condenar al Frente Farabundo Martí en la reunión de San Salvador en julio de 1991. Sostuvieron que en una democracia consumada la insurrección carece de justificación, por lo que instaron al desarme y desmovilización de los insurgentes, así como su incorporación -dentro del marco de la legalidad- a la vida civil, institucional y política de El Salvador.

El proceso negociador culminó el 16 de enero de 1992 con la firma de los acuerdos de paz entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el gobierno salvadoreño, con lo cual se puso fin a una larga y dolorosa guerra civil. No dejaba de resultar curioso de que fuera un gobierno de derecha el que suscribiera la paz con la insurrección de izquierda, pese a los vaticinios catastrofistas que algunos observadores hicieron al triunfar Cristiani en 1989.

La etapa posterior a la firma de los acuerdos de Chapultepec fue conocida como la fase de la paz armada, de un año de duración. Ella consistió en el desarme total del Farabundo Martí como fuerza armada irregular, en la eliminación de los batallones de contrainsurgencia, en la reducción del número de efectivo de la Fuerza Armada, en el desmantelamiento de los cuerpos paramilitares, en la elaboración por la Comisión de la Verdad del informe sobre violaciones de derechos humanos titulado «De la locura a la esperanza. La guerra de doce años en El Salvador».

Concluida la fase de paz armada, se entró de lleno a la consolidación del proceso de pacificación y las fuerzas políticas comenzaron a prepararse para las elecciones presidenciales de

1994, donde triunfó el candidato de ARENA, Armando Calderón Sol. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional quedó convertido en una real alternativa electoral, con fuerte presencia parlamentaria y con posibilidades de ser opción de gobierno en el año 2000.

El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional al volcarse hacia el trabajo político, con los obvios énfasis programáticos y objetivos electorales, dio cuenta de su composición heterogénea que la insurrección había logrado neutralizar. Al decir de Raúl Benítez «desde la firma de la paz han reaparecido las diferencias entre las agrupaciones¹⁷, que se suponían superadas durante la época de la guerra y las negociaciones»¹⁸.

Esto llevará al establecimiento de tendencias internas claramente definidas en dos: los renovadores y los tradicionales. Los primeros, partidarios de replantearse en materias políticas y económicas, aceptando la vigencia del mercado como principal asignador de recursos y valorando la democracia como único medio para dirimir la competencia política. Los segundos, en tanto, prolongadores de un nostálgico discurso confrontacional con sentido clasista, aceptando la democracia de manera instrumental. En la Convención de 1997 el triunfo al interior del Frente favoreció a los renovadores, convirtiéndose el Farabundo Martí en un actor político de perfil socialdemócrata, y pasando a ser, por lo mismo, uno de los puntales de la estabilidad institucional de El Salvador.

¹⁷Los grupos que conforman el Frente Farabundo Martí son cinco: el Partido Comunista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de la Resistencia, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, y las Fuerzas Populares de Liberación.

¹⁸Benítez Manaut, Raúl: «El Salvador. Paz conflictiva, democracia frágil», en Revista «Nueva Sociedad», N. 126, Julio-Agosto de 1993.